

Señora

JUEZ VEINTINUEVE (29) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D. C.
E. S. D.

REFERENCIA: Proceso Verbal N° 11001-40-03-029-2024-01396-00.

De OSCAR FERNANDO CUELLAR PINZON contra RICARDO
SEGURA ALBINO y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
ORGANISMO COOPERATIVO.

VÍCTOR MAURICIO CAVIEDES CORTÉS, apoderado reconocido del demandante, mediante el presente escrito **descorro** las **excepciones** propuestas por la doctora **Luisa Fernanda Velásquez Ángel**, apoderada de **Ricardo Segura Albino**, lo que hago en el orden propuesto y en los siguientes términos:

I. TERMINO PARA DESCORRER LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS.

El parágrafo del artículo 9° de Ley 2213 de 2022, textualmente preceptúa

"Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje."

En concordancia con el artículo 370 del C.G.P., el cual reza:

"PRUEBAS ADICIONALES DEL DEMANDANTE. Si el demandado propone excepciones de mérito, de ellas se correrá traslado al demandante por cinco (5) días en la forma prevista en el artículo 110, para que este pida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan."

Valga recordar el requisito establecido en la ley, el cual indica que cuando se pretenda prescindir del traslado de las excepciones, será menester hacer el envío de los documentos mediante correo certificado.

En el presente asunto, el requisito no fue satisfecho, sin embargo, si la Señora Juez considera que mi apreciación no es correcta, entonces el término de lo cinco (5) días empezó a correr el día miércoles 18 de junio de 2025, y finaliza el miércoles 25 del mismo mes y año, teniendo en cuenta que el correo remitido por la doctora Luisa Fernanda Velásquez Ángel, llegó el martes 13 de junio de 2025.

II. EN CUANTO A LA CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS

Si bien es cierto que no tengo la obligación legal de pronunciarme sobre la contestación de los hechos que realiza la parte pasiva, también lo es que dejar pasar por desapercibido las mismas, es permitir que los sucesos reales sean ignorados, es así como me pronuncio respecto a aquellos que me parecen relevantes.

Hechos 4° y 5°. Estos hechos se encuentran plenamente probados en el proceso mediante el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001394015.

La doctora Luisa Velásquez no allega prueba alguna que respalde sus afirmaciones, mediante las cuales intenta sustraerse de la evidente responsabilidad que recae sobre Ricardo Segura Albino, la togada afirma que mi representado se desplazaba a exceso de velocidad y que fue él quien colisionó con el vehículo de placas KER951.

Sin embargo, tales manifestaciones carecen por completo de respaldo probatorio en el expediente, lo que sí está debidamente demostrado es que la responsabilidad del siniestro recae única y exclusivamente en Ricardo Segura Albino, quien desatendió de manera deliberada la señal de

“PARE” ubicada en el lugar de los hechos, como consta de forma clara y precisa en el Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001394015.

Es pertinente resaltar que dicho informe es un documento público, elaborado por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales, y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código General del Proceso, cumple con los requisitos de autenticidad: se conoce la identidad de su autor, se encuentra debidamente firmado y no ha sido objeto de tacha de falsedad ni de impugnación dentro del proceso. Por ende, goza de plena fuerza probatoria, tanto respecto de la ocurrencia del accidente como de la responsabilidad que de él se deriva, así como de los daños resultantes.

Hechos 6°, 7°, y 9°. Las lesiones personales sufridas por mi representado, el manejo de terapias físicas y las restricciones medicas recomendadas, se encuentran plenamente documentados en la historia clínica y en los informes periciales de clínica forense expedidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pruebas que fueron debidamente aportadas al proceso.

Por ello, insto respetuosamente a la apoderada de la parte demandada a realizar un análisis exhaustivo de las pruebas allegadas al proceso. En estos documentos se detalla con precisión las graves y persistentes afecciones a mi representado derivadas del accidente de tránsito.

Hecho 10°. Dentro del presente proceso, allegué como prueba documental una certificación de ingresos mensuales expedida por la contadora publica, Alba Luz Rincón Castro, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.407.793 de Zipaquirá y con tarjeta profesional No. 105015-T, la cual fue debidamente acompañada de los soportes que la respaldan, tales como: una declaración extrajuicio emitida por la Notaría 50 del Círculo de Bogotá, la declaración de renta correspondiente al año gravable 2022 y los extractos bancarios respectivos.

De la revisión integral de dichos documentos, se evidencia con claridad que mi representado percibía un ingreso mensual promedio de \$6.000.000, producto del desarrollo de su actividad comercial como propietario del establecimiento de comercio Distribuidora de Belleza Mokka, ubicado en la ciudad de Zipaquirá.

En consecuencia, carece de sustento la objeción formulada por la parte demandada en este hecho, toda vez que la apoderada contaba con todos los elementos probatorios necesarios, idóneos y concordantes para tener por acreditado el hecho alegado, razón por la cual solicito respetuosamente al despacho que lo tenga como cierto.

Hecho 12°. Nuevamente, en la contestación de los hechos se está pasando por alto todo el material probatorio allegado, lo cual resulta gravoso para el proceso, pues, en lo relativo a este numeral, encuentra soporte en la reclamación radicada a la aseguradora y la respuesta a esta, adicional a esto, con las pruebas aportadas se logra demostrar la fecha de radicación de la reclamación, por lo cual, no es claro el argumento de la parte pasiva al indicar que no le consta, pues contaba con el material probatorio para tener estos hechos como ciertos.

En el traslado entregado a los demandados obran las pruebas necesarias para que, al responder la demanda, el apoderado pueda aceptarlas, negarlas o rechazarlas. No es aceptable que, al contar con elementos de juicio suficientes, conteste de manera simple que no le constan los hechos, cuando estos pueden ser debidamente contestados conforme a derecho con las pruebas adosadas al plenario por el suscrito apoderado de la parte activa. Por lo tanto, solicito respetuosamente a la Señora Juez que, en aplicación del artículo 97 del Código General del Proceso, declare ciertos los hechos susceptibles de confesión que no fueron respondidos adecuadamente por la defensa de Ricardo Segura Albino.

III. CONTESTACIÓN A LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS.

1. La denominada **EL COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA FUE DETERMINANTE EN LA PRODUCCIÓN DEL ACCIDENTE, LO QUE IMPIDE IMPUTAR EL RESULTADO DAÑOSO.**

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la responsabilidad derivada de la conducción de vehículos automotores es objetiva, en virtud de la peligrosidad inherente a esta actividad. En la sentencia del 18 de junio de 2013, la Corte expresó que:

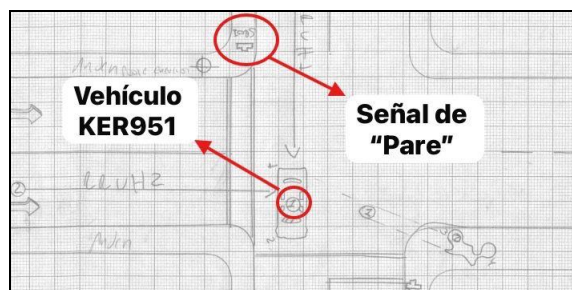
"La responsabilidad derivada de una actividad peligrosa es directa respecto de quien cometió el hecho, pues se trata de la violación de una obligación de resultado, a cargo del demandado como inmediato responsable de la actividad, lo que da nacimiento a la culpa origen de su responsabilidad, siendo de igual naturaleza a la que ostentan los guardianes de la cosa." Subrayado fuera del texto.

Por lo tanto, resulta evidente que la conducción y tenencia del vehículo de mayor tamaño, como lo es el vehículo de placas KER951, involucrado en el accidente objeto del presente proceso, impone a su conductor un deber de diligencia calificado y reforzado, que no solo deriva de las dimensiones del automotor, sino también del riesgo potencial que la inadecuada e indebida movilización representa, especialmente cuando el demandado propietario omite una señal que lo obliga a detener su vehículo (SR01), de forma que al no acatarla, está violando directamente el deber objetivo de cuidado con los demás actores viales.

No se trata de una afirmación caprichosa de este togado, es un hecho cierto y probado en el expediente que el vehículo de placas KER951 omitió la señal de "PARE". Tal circunstancia ha sido debidamente probada a través del Informe Policial de Accidente de Tránsito N° A001394015.

En el numeral 17 del Informe Policial de Accidente de Tránsito N.º A001394015 (Bosquejo topografía), el patrullero asistente al lugar de los hechos, dejó constancia de:

- ℙ La ubicación de la señal reglamentaria PARE, que es la esquina del costado derecho del sentido de circulación del rodante de placas KER951.
- ℙ El vehículo de placas KER951, era el que estaba en la obligación de respetar la señal de PARE, esto es, detener la marcha del automotor, es decir, que la velocidad en la intersección sea CERO, precisamente para respetar la prelación que los otros automotores tienen sobre la calle 4F.
- ℙ Finalmente, observamos que el carro de placas KER951, es el rotulado con el número 1, es decir, quien infringió el deber objetivo de cuidado, al hacer caso omiso a la señal que le imponía detenerse en la intersección.



Numeral 11 del del Informe Policial de Accidente de Tránsito N.º A001394015 (Hipótesis del accidente de tránsito), el patrullero asistente al lugar de los hechos, codificó al infractor de la norma de tránsito.

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO			
DEL CONDUCTOR	112	DE	
OTRA		DE	
ESPECIFICAR ¿CUAL?			

Hipótesis 112, que de acuerdo con la Resolución 11268 del 6 de diciembre de 2012, proferida por el Ministerio del Transporte, vigente para la fecha de los hechos, corresponde a **"Desobedecer señales o normas de tránsito"**, y la define como **"no acatar las indicaciones de las señales existentes en el momento del accidente. No confundir con carencia de señales. O no respetar en general, las normas descritas en la Ley"**

La imposición de esta hipótesis no fue caprichosa por parte del agente de tránsito que conoció el hecho y diligenció el Informe Policial de Accidente de Tránsito N° A001394015, pues efectivamente existe una señal de “PARE” en el sentido de la vía que transitaba Ricardo Segura Albino y que tenía la obligación de acatar.



Tal conducta constituye una infracción grave al deber objetivo de cuidado que debe tener todo conductor, más aún si decide transitar por las vías sin atender las normas de tránsito, incrementa, exponencialmente el riesgo para los demás usuarios de la vía. Esta omisión no puede ser desestimada ni minimizada, en tanto que fue determinante en la cadena causal del accidente y en la magnitud de las lesiones sufridas por mi representado.

Contario a lo argüido por la defensa del responsable del accidente de tránsito, el demandante en la presente acción, no omitió ninguna señal de tránsito, no excedía los límites de velocidad y no fue quien colisiono al vehículo de placas KER951.

Es esencial recordar que el Informe Policial de Accidente de Tránsito es un documento público, elaborado por autoridad en el ejercicio de sus funciones. La autenticidad del documento y la identidad de quien lo elaboró y firmó son indiscutibles, otorgándole plena validez probatoria conforme al artículo 244 del Código General del Proceso.

La Corte Constitucional en sentencia C - 429 de 2003, respecto del Informe Policial de Accidente de Tránsito y la impugnación del mismo, hizo el siguiente análisis:

"No prevé la norma sub examine que en el texto del informe descriptivo el conductor pueda plasmar los motivos de su disenso con los datos y apreciaciones que en éste se contengan. Sin embargo, los formatos que actualmente emplean los agentes de tránsito en estos casos cuentan con los correspondientes espacios para que los conductores expresen su inconformidad con los datos, afirmaciones y apreciaciones que aparecen consignados en el informe descriptivo."

La precisión efectuada por la Honorable Corte permite concluir que el Informe Policial de Accidente de Tránsito cuenta con espacios específicamente destinados para que las personas involucradas expresen sus inconformidades frente a los hechos consignados por el agente de tránsito. Esto garantiza que sus versiones puedan ser recogidas formalmente y, en consecuencia, valoradas dentro del acervo probatorio conforme a los principios de contradicción y debido proceso.

En tal sentido, si la apoderada del demandado no está de acuerdo con lo allí consignado, particularmente en lo que se refiere a la codificación de responsabilidad atribuida a su representado, debe advertirse que este no es el momento procesal adecuado para controvertir dicho contenido. Esa inconformidad debió ser manifestada por su cliente precisamente al momento en que el funcionario de policía diligenció el informe, permitiendo así que su reparo quedara registrado de forma expresa en el documento.

El I.P.A.T., constituye prueba documental irrefutable que compromete la responsabilidad de Ricardo Segura Albino, en este informe se evidencia de manera clara y precisa que el vehículo de

placas KER951 omitió la señal de tránsito, quebrantando las disposiciones de las normas de tránsito.

Por otro lado, para la prosperidad de la culpa exclusiva de la víctima, es necesario que el invocante demuestre lo dispuesto por el Consejo de Estado, en donde plantearon tres elementos que deben estar acreditados y concurrir para la probanza de la causal de exoneración invocada, a saber: (i) irresistibilidad; (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado, y, en punto del hecho de la víctima debe acreditar que el daño provino del actuar imprudente o culposos de ésta.

De forma que, si la intención de la apoderada de la demandada era el romper el nexo causal, en el hipotético evento que hubiera lugar a ello, aunado a lo antes expuesto, también debió hacerlo como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado, esto es:

"(...) La modalidad exonerativa consistente en el hecho de un tercero se estructura cuando el daño cuyo resarcimiento se pretende no puede ser jurídicamente imputable al demandado, sino a alguien diferente, carente del ligamen con él y causante directo del menoscabo.

*Siendo ello así, **para que el demandado pueda liberarse de responsabilidad deberá acreditar que el hecho del tercero fue el único factor determinante del daño y que su aparición se produjo, como en toda causa extraña, en circunstancias imprevisibles e irresistibles**, inclusive, para el reclamante de la indemnización y, en definitiva, que por esa circunstancia se halla ausente el nexo de causalidad. Si el hecho del tercero puede ser prevenido o resistido por el convocado, éste deberá sufrir los efectos de la imputación que le asiste. Negrilla y subrayado por fuera del texto.*

Ahora, si el hecho del tercero concurre con el del demandado en la producción del daño, la obligación resarcitoria nacerá para ambos, al generarse la solidaridad prevista en el artículo 2344 del Código Civil. En esa hipótesis, el convocado no quedará exonerado de su responsabilidad; para que ello acontezca, debe acreditarse que el actuar de aquel, fue en verdad ajeno, exclusivo, irresistible, imprevisible y determinante del menoscabo sufrido por la víctima (...)"¹

Es claro que la teoría de la jurisprudencia no aplica para Oscar Fernando, ya que ella en virtud del principio de confianza, confió que Ricardo Segura se comportaría como se lo impone y exige las normas de tránsito, esto es, con diligencia, cuidado, no violando el deber objetivo de cuidado, y velar por la seguridad de los demás usuarios de la vía, que en el caso que nos ocupa, no se dio.

Es menester recordar a la togada y a las partes que Oscar Fernando no conducía el vehículo de placas KER951, por ende, no tenía control del rodante, por ello no fue quien omitió atender la señal de PARE.

Todo esto para poner de presente que todas las afirmaciones hechas por la doctora Velásquez, con las que busca atribuirle la responsabilidad a mi representado, son falsas, no se ajustan a la verdad de lo sucedido y tampoco están probadas en el expediente, mientras que las realizadas por el suscrito si encuentra material probatorio contundente.

Dado que el Informe Policial de Accidente de Tránsito N° A001394015 no fue impugnado, ni tachado de falso por la parte demandada con pruebas pertinentes, su estatus como documento público original goza de plena validez en el expediente. Solicito respetuosamente a la Señor Juez que así lo decrete en la sentencia que ponga fin a la presente instancia.

2. La denominada LA CULPA DE LA VÍCTIMA CONLLEVA O A LA EXONERACIÓN TOTAL DE LOS DEMANDADOS, O MÍNIMO A UNA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN (SUBSIDIARIA A LA 4.2.).

Resulta absolutamente carente de lógica lo expuesto en la excepción formulada por la apoderada de la parte demandada, en la que sostiene que su representado había atravesado en un 90% la intersección al momento del accidente. Tal afirmación es una evidentemente confesión por apoderado de la responsabilidad del demandado Segura Albino, como puede corroborarse mediante un análisis, incluso superficial, de las mismas pruebas fotográficas aportadas por la

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: LUIS ALONSO RICO PUERTA, Veinticinco (25) de Abril de Dos Mil Dieciocho 2018, Ref: Exp. 08001-31-03-003-2006-00251-01

propia excepcionante. Si, en efecto, el vehículo hubiera atravesado en tal proporción la intersección, el punto de impacto habría recaído en uno de los costados del automotor, y no en su parte frontal, como está debidamente acreditado en el expediente.

En gracia de discusión, y dando continuidad al punto anterior, si Segura Albino hubiera pasado el 90% del automóvil, y el impacto en rodante pilotado por él, es en la parte frontal, como lo fue, entonces, es lógico concluir que el motociclista circulaba a pocos centímetros del sardinel.

El argumento sin pruebas de la parte demandada es que Oscar Fernando circulaba a exceso de velocidad, de ser cierto tanto esto como el porcentaje de avance del carro de Segura Albino, la mecánica del impacto necesariamente tendría que ser diferente, esto es, por la presunta velocidad del motociclista al momento del impacto. el conductor de la moto saldría expulsado hacia el sentido de circulación del carro de placas KER951, no habría terminado en el andén del frente de manera diagonal y las afectaciones en la humana del demandante, serían muchos más graves de lo que fueron.

Alegar que no se detuvo en la intersección es una falacia, si tenemos en cuenta que la intersección esta señalizada, es decir, TODO VEHÍCULO QUE CIRCULE POR LA CARRERA 43B, DEBE DETENER LA MARCHA, HACER CERO (0) LA VELOCIDAD, precisamente porque la intersección está reglamentada, esto es, la calle 4F tiene la prelación.

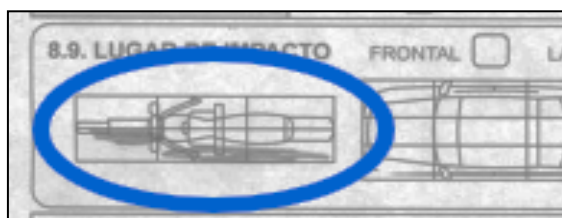
Si el usuario de la calle 4F circula a exceso de velocidad, pero el automotor de la carrera 43B detiene la marcha como se lo impone el PARE, no sucede el accidente que ahora nos ocupa.

El Informe Policial de Accidente de Tránsito N° A001394015, documento público que goza de plena validez probatoria conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, describe de forma detallada los puntos exactos de impacto sufridos por los vehículos involucrados:

P Vehículo de placas KER 951



P Motocicleta de placas UIX12F.



En dicho informe técnica se establece que el vehículo de placas KER951 sufrió el impacto en su parte delantera, lo cual desvirtúa por completo la versión de los hechos presentada por la parte demandada.

Contrario a lo afirmado por la apoderada de Segura Albino, mi representado no apareció intempestivamente ni transitaba a alta velocidad. Lo cierto es que ya había ingresado completamente a la vía en la cual tenía prelación, cuando el señor Segura Albino, desatendiendo la señal de PARE existente en el lugar, irrumpió en la intersección, sin observar la presencia del actor y sin respetar las normas mínimas de tránsito y el deber objetivo de cuidado, conducta con la que dio lugar al accidente que hoy se debate en este proceso.

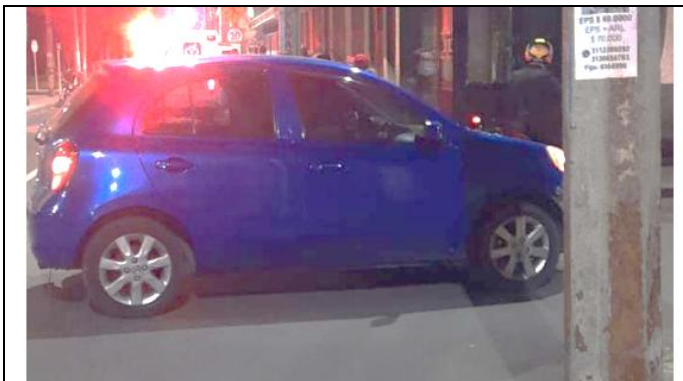
Así mismo, reitero que no se ajusta a la verdad la afirmación según la cual el demandado había cruzado en un 90% la intersección. Si ello fuera cierto, el impacto se habría producido en uno de los costados del vehículo. Sin embargo, como lo evidencian las fotografías obrantes en el expediente, tanto el costado izquierdo como el derecho del vehículo de placas KER951 se

encuentran completamente intactos, lo cual reafirma que el impacto ocurrió frontalmente y, por tanto, cuando el vehículo apenas ingresaba a la intersección, omitiendo la obligación de detenerse ante la señal de tránsito.

P Fotografía – Costado izquierdo del vehículo de placas KER951.



P Fotografía – Costado derecho del vehículo de placas KER951



La evidencia técnica y documental obrante en el proceso desvirtúa por completo los argumentos esgrimidos por la parte demandada y reafirma la responsabilidad plena del señor Ricardo Segura Albino en la ocurrencia del accidente.

Por otro lado, de la lectura detenida de la excepción propuesta por la parte demandada, resulta evidente que se trata de un intento por eludir la responsabilidad legal y material que recae sobre Ricardo Segura Albino. Esta excepción se limita a una evasiva del deber de indemnizar los perjuicios causados a mi representado, sin exponer de manera clara, concreta y sustentada las razones fácticas, jurídicas, jurisprudenciales o doctrinales que permitan afirmar que el demandante contribuyó de manera efectiva a la causación del daño.

Esta excepción raya en lo irrespetuoso frente al grave daño padecido por el lesionado, quien padece secuelas físicas permanentes y afronta una reducción significativa de su calidad de vida. Oscar Fernando Cuellar Pinzón no solo ha sido víctima de un hecho traumático, sino que continúa enfrentando dolor crónico, restricciones funcionales y una carga emocional que se intensifica con el paso del tiempo, lo que constituye una agravación del perjuicio inicialmente causado.

En contraste, los hechos, la responsabilidad y las pretensiones están debidamente acreditados en el expediente a través de pruebas claras, contundentes, concordantes y legalmente obtenidas, las que demuestran que la causa eficiente y directa del accidente fue el comportamiento imprudente, negligente y contrario a derecho de Ricardo Segura Albino. Este último incurrió en múltiples violaciones al Código Nacional de Tránsito, derivado de omitir las señales de tránsito existentes en el lugar.

Si el objetivo de la parte demandada era liberarse de responsabilidad, le correspondía demostrarlo mediante prueba idónea, pertinente y conducente, que la causa del daño fue ajena a su conducta, lo que no ocurrió. Por tanto, sin temor a equivocarme y con el respaldo del acervo probatorio obrante en el proceso, afirmo que la causa eficiente del daño sufrido por Oscar Fernando Cuellar

Pinzón fue la actuación culposa de Ricardo Segura Albino conductor del vehículo de placas KER951, quien, con negligencia, impericia y violación del deber objetivo de cuidado, quebrantó el principio de confianza que debe regir entre todos los actores viales.

Demostrado esta que mi prohijado no participó activamente en el evento en el que la causaron lesiones, por lo que considero apropiado transcribir lo que la Corte ha indicado:

*"En este orden de ideas, **cabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuación de la indemnización debida por el agente, pues para tales efectos será menester, y las razones son obvias, que la actividad de la víctima concorra efectivamente con la de aquél en la realización del daño** (...) ² negrillas fuera de texto.*

En punto de la compensación de culpas, la sentencia SC2107-2018, radicación: 11001-31-03-032-2011-00736-01, de fecha 12 de junio de 2018, Magistrado Ponente, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, que al respecto enseña:

"Y de otro, según lo preceptúa el artículo 2357 del Código Civil, cuando en la producción del daño participan de manera simultánea agente y lesionado, circunstancia que no quiebra el "nexo causal", indiscutiblemente conduce a una disminución proporcional de la condena resarcitoria impuesta eventualmente al demandado, la cual, se estimará dependiendo el grado de incidencia del comportamiento de la propia víctima en la realización del resultado lesivo⁴.

Empero, para establecer si hay concurrencia de causas, las mismas pueden ser anteriores, coincidentes, concomitantes, recíprocas o posteriores, al punto de que el perjuicio no se causaría sin la pluralidad de fenómenos causales, pues de lo contrario, dicho instituto no tendría aplicación.

A propósito, dijo esta Corte:

*"(...) No obstante, como lo ha destacado la jurisprudencia nacional, la designación antes señalada no se ajusta a la genuina inteligencia del principio, pues no se trata 'como por algunos se suele afirmar equivocadamente que se produzca una compensación entre la culpa del demandado y la de la víctima, porque lo que sucede, conforme se infiere del propio tenor del precepto, es que entre **la denominada culpa de la víctima y el daño ha de darse una relación de causalidad, como también debe existir con la del demandado.** Por eso, cuando ambas culpas concurren a producir el daño, **se dice que una y otra son concausa de este**" Negrilla y subrayado por fuera del texto.*

En otra sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

"(...) siendo imputable a la conducta de ambos, sea o no dolosa o culposa, cada uno será responsable en la medida de su contribución y, tales aspectos, los definirá el juzgador de conformidad con las reglas de experiencia y la sana crítica, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, para cuyo efecto el ordenamiento jurídico le atribuye al juez la amplitud en la valoración de las probanzas, en todo cuanto respecta a la determinación de la responsabilidad e incidencia de las conductas concurrentes. Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro (...) ⁵

Por lo expuesto, plantear una concurrencia de culpas es una evidente desproporción de condiciones frente al suceso, es absurdo y temerario, razón por la cual, de manera respetuosa solicito a la Señora Juez que esta excepción sea completamente desestimada en la sentencia que ponga fin a la instancia, por ello declare la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda.

3. La denominada **INEXISTENCIA Y/O SOBREESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS CUYA INDEMNIZACIÓN RECLAMA LA PARTE ACTORA.**

Para pronunciarme de fondo respecto a la presente excepción, expondré la metodología empleada para la tasación de cada uno de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales reclamados en esta acción, así como el acervo probatorio que sustenta y respalda de forma clara, suficiente y pertinente cada uno de los rubros pedidos.

² CSJ SC 6 de mayo de 1998, rad. 4972., ratificada en sentencia SC2107-2018 M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

³ "La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente".

⁴ CSJ SC 6 de abril de 2001, rad. 6690.

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS, Veinticuatro (24) de Agosto de Dos Mil Nueve 2009, Ref: Exp. C-25899-3103-002-2002-00084-01

3.1 PERJUICIOS PATRIMONIALES:

P **Lucro cesante consolidado:**

Es pertinente resaltar que, dentro del presente proceso, allegué como prueba documental una certificación de ingresos mensuales expedida por la contadora pública Alba Luz Rincón Castro, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.407.793 de Zipaquirá y tarjeta profesional No. 105015-T. Dicha certificación fue debidamente acompañada de los respectivos soportes contables y financieros que la respaldan, a saber: una declaración extrajuicio rendida ante la Notaría 50 del Círculo de Bogotá, la declaración de renta correspondiente al año gravable 2022, y los extractos bancarios pertinentes que permiten verificar la trazabilidad de los ingresos reportados.

Del análisis conjunto e integral de estos documentos se concluye con claridad que mi representado percibía un ingreso mensual promedio de seis millones de pesos (\$6.000.000), producto de su actividad económica como propietario del establecimiento de comercio “Distribuidora de Belleza Mokka”, ubicado en la ciudad de Zipaquirá, actividad que desarrollaba de manera regular y que constituye su principal fuente de sustento.

Ahora bien, como consecuencia directa del accidente materia de este proceso, mi representado debió guardar una prolongada incapacidad médica de más de ciento veintidós (122) días, periodo durante el cual se vio totalmente imposibilitado para desarrollar su actividad comercial, lo que conllevó la suspensión total de sus ingresos ordinarios. Esta situación no solo se encuentra plenamente acreditada con el acervo probatorio obrante en el expediente, sino que además permite configurar, de manera concreta, el perjuicio económico sufrido por el demandante, el cual debe ser debidamente reconocido y cuantificado en la sentencia, a título de lucro cesante consolidado.

Vale recordar que este perjuicio se encuentra expresamente regulado en el artículo 1614 del Código Civil, el cual establece:

"la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento".

Esta solicitud no solo es procedente en derecho, sino que está plenamente acreditada en el expediente con los certificados de ingresos y documentos médicos pertinentes, por lo que debe acogerse como parte integral del resarcimiento de los daños que sufrió mi representado:

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respecto de este tema, enseña:

"(...) El lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado. Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afianza en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente. (...).⁶

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, es preciso reiterar que el lucro cesante corresponde a aquellos ingresos que una persona habría percibido en condiciones normales, de no haber mediado el hecho dañoso. Es decir, se trata de un perjuicio cierto y mensurable, representado por la disminución real en el patrimonio del afectado.

Para la tasación del lucro cesante consolidado hice uso de la formula financiera que ha pregonado la jurisprudencia, en la que las variables son los días de incapacidad, así como el salario mínimo para el día del accidente, así:

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA. veinticuatro (24) de junio de dos mil ocho (2008). Ref: Exp. 11001 3103 038 2000 01141 01

$$LCP = RA \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Para ello es necesario saber:

- ℙ LCP = Lucro cesante pasado
- ℙ RA = Renta Actualizada
- ℙ i = Es la variable que se obtiene de dividir el 6% anual en los meses del año, y su valor es la constante **0,004867**.
- ℙ n = corresponde a los meses a liquidar a obtener el lucro cesante.

Ahora, para obtener RA, se despeja la fórmula $RA = \frac{VH \times I.F.}{I.I.}$.

De donde, **VH = valor histórico**, se obtiene de incrementar al salario ingreso mensual de la víctima el 25%, que corresponde a factor prestacional. Operación que encuentra su fundamento jurídico en la resolución del Consejo de Estado, luego de incrementado se realizan las operaciones de los índices.

I.F., corresponde al índice de precios al consumidor del mes en que se realiza la liquidación, que puede ser la fecha de radicación de la demanda, y/o fecha de la reclamación.

I.I., índice de precios al consumidor de mes vigente de la fecha del hecho dañoso.

Una vez obtenido el resultado de esta operación, se le debe descontar el 25%, correspondiente a los gastos propios, que encuentran fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

De esta forma obtuve la tasación por este perjuicio, al que denominé **Lucro cesante consolidado**.

ℙ **Indemnización del perjuicio por el hecho dañoso**

Este perjuicio lo defino como la compensación económica que se debe otorgar a la víctima del hecho lesivo en el que le causaron daño. Esta indemnización busca reparar el menoscabo sufrido por el perjudicado y lo fundo en el principio según el cual *quien causa daño a otro está obligado a indemnizar a la víctima de manera que lo deje en condiciones poco más o menos parecidas a las que se encontraba antes del hecho dañino*.

Esta reparación abarca los daños directamente originados por el acto causante del perjuicio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil, el cual establece:

"El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido".

También acuden a probar este perjuicio el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual

"ARTÍCULO 16. Valoración de daños. *Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales*" Negrilla y subrayado por fuera del texto.

En el presente caso, solicité la indemnización de perjuicio por el hecho dañoso, basado en el hecho cierto que la víctima sufrió una lesión debido a la negligencia del conductor Ricardo Segura Albino, quien violó el deber objetivo de cuidado, no respetó las normas de tránsito, entre otras reprochables conductas.

En este punto considero prudente traer a colación un aparte del doctrinante Javier Tamayo Jaramillo, según el cual

Sin embargo, es preciso aclarar que el daño físico a la persona genera por sí solo un daño o perjuicio en sentido jurídico, pues la vida y la integridad personal son ventajas que posee lícitamente el perjudicado, así no sufra lucro cesante o daño emergente. La integridad personal es, en todo caso, un beneficio extrapatrimonial que, al ser afectado, ipso facto, genera un daño jurídico. Hay allí un

daño físico y otro jurídico. El mendigo que pierde la vida sufre un daño jurídico. Negrilla y subrayado por fuera del texto

Considero que la pretensión debe ser razonada y sensata, es por ello que hice uso de los elementos que la jurisprudencia nos ha dotado, esto es, la fórmula para la tasación del lucro cesante en su modalidad de pasado o consolidado. Por supuesto que si la Señora Juez encuentra elementos de juicio jurídicamente validos diferentes a lo que propongo, y cumplen el objetivo de indemnizar en debida forma al demandante, por supuesto que serán de recibo por esta parte procesal, mientras eso sucede, en el ejercicio del derecho de acción de mi representado, expuse de manera razonada, sensata, justa, equitativa y ajustada a derecho la liquidación de la **indemnización por el hecho dañoso**, lo que no sucede con la oposición de la defensa de Segura Albino, de los perjuicios de orden material que se opone pero no se esfuerza por probar su dicho, solo meros ataques sin esfuerzos probatorios

Dando continuidad a lo anterior, en la fórmula al despejar las variables, donde **N** corresponde al número de días transcurridos desde el accidente hasta el 3 de julio de 2022, fecha en la que mi representado, finalizo la incapacidad de 122, días ordenada por el médico tratante, acudo al ingreso mensual que percibía mi representado para el año 2022, es decir seis millones de pesos (\$6.000.000) m/cte, para hallar la variable VH.

La estructura de la fórmula es:
$$\text{IPHD} = \text{RA} \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Para ello es necesario saber:

ℙ **IPHD = Indemnización del Perjuicio por el Hecho Dañoso**

ℙ RA = Renta Actualizada

ℙ i = Es la variable que se obtiene de dividir el 6% anual en los meses del año, y su valor es la constante **0,004867**.

ℙ n = corresponde a los meses a liquidar a obtener el lucro cesante.

ℙ Ahora, para obtener RA, se despeja la fórmula **RA = $\frac{\text{VH} \times \text{I. F.}}{\text{I.I.}}$**

De donde, **VH = valor histórico**, se obtiene de incrementar al salario ingreso mensual de la víctima el 25%, que corresponde a factor prestacional. Operación que encuentra su fundamento jurídico en la resolución del Consejo de Estado, luego de incrementado se realizan las operaciones de los índices.

I.F., corresponde al índice de precios al consumidor del mes en que se realiza la liquidación, que puede ser la fecha de radicación de la demanda, y/o fecha de la reclamación.

I.I., índice de precios al consumidor de mes vigente de la fecha del hecho dañoso.

De esta forma obtuve la tasación por este perjuicio, al que denominé **indemnización de perjuicios por el hecho dañoso**.

Con base en lo anterior, es evidente que los perjuicios patrimoniales alegados se encuentran debidamente acreditados dentro del expediente, por lo que no resulta de recibo la excepción expuesta por la parte demandada.

3.2 PERJUICIOS PATRIMONIALES:

En cuanto a los daños morales, es fundamental precisar que, dentro de la jurisdicción civil, no existe un baremo tarifado que establezca un monto fijo para la compensación de los daños morales, a diferencia de lo que sucede en la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido ampliamente que todo daño es resarcible, incluyendo el daño moral, el cual debe ser valorado en función de la magnitud del sufrimiento y la afectación padecida por la víctima y su núcleo familiar.

En el caso concreto, Oscar Fernando Cuellar Pinzón sufrió graves lesiones a raíz del accidente ocurrido el 4 de marzo de 2022. Han transcurrido más de tres años desde el siniestro, y pese a haber recibido múltiples tratamientos médicos, aún presenta secuelas permanentes que han alterado de manera significativa su calidad de vida, sin que el perjuicio haya logrado consolidarse, esto es, que no se vislumbra que este cerca el momento en el que se pueda afirmar con grado de certeza que en el futuro Cuellar Pinzón no tendrá más padecimientos que puedan ser imputados al evento investigado.

Aun cuando ha sido sometido a varios procedimientos médicos, las afectaciones persisten, impactando no solo su bienestar físico, sino también su estabilidad emocional y autoestima.

En particular, las limitaciones funcionales derivadas de la fractura de la vertebra L1, L2 Y L3, que le impiden desempeñar con normalidad actividades física o rutinarias, afectando la movilidad, independencia y proyectos personales. Este sufrimiento trasciende el mero dolor físico, pues ha ocasionado estrés, ansiedad y un deterioro emocional continuo, configurando así un claro perjuicio moral que debe ser reparado.

En este sentido, la Corte constitucional ha dicho:

"(...) Bien sabido es que por fuerza de una larga y fecunda evolución jurisprudencial que inició la Corte hace setenta años (G. J. num. 1515 pág. 220), hoy en día es principio de vigencia indubitable en el ordenamiento nacional aquél de acuerdo con el cual, por mandato del artículo 2341 del Código Civil leído en consonancia con el primer inciso del artículo 2356 ibídem, todo daño es resarcible, aún el no patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque antijurídico a un interés que ante el derecho deba juzgarse digno de protección. En otras palabras, todo daño derivado de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es de suyo indemnizable, independientemente de que las consecuencias de esa acción antijurídica representen menoscabo para un patrimonio, afectando su actual composición o sus posibilidades económicas futuras —evento en el que se dice que el daño es "material"—, o constituyan por el contrario, dichas consecuencias, lesión a los sentimientos de una persona y causa para ella "... de padecimientos de orden síquico ..." (G. J. T. CXIX, pág. 259), de inquietud espiritual y de agravio a sus íntimas afecciones, configurándose así el llamado "daño moral" que no por ser refractario a precisas apreciaciones pecuniarias, deja de admitir a la vez reparación; de aquí entonces que, aludiendo a este punto en concreto del fundamento mismo de la indemnización del daño moral y para responder a conocidos reparos que contra su reconocimiento se han formulado de vieja data, tenga dicho esta corporación que "... tratándose de estimar perjuicios que pueden llamarse morales, por no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado, se presenta el escollo de la indeterminación de la cuantía por falta de unidad de medida para su apreciación; pero ello no es motivo para desconocer el hecho de la reparación, aun cuando ésta sea difícil o imposible ...".

"... En estos casos, insiste la Corte, debe buscarse una reparación pecuniaria que de alguna manera reemplace o permita reemplazar el bien perdido o el dolor sufrido, haciendo la pena menos sensible, abriéndole al querellante una nueva fuente de alivio y bienestar ..." (G. J. T. XXXI, pág. 83), lo que con claridad pone de manifiesto que la reparación, cuando de daños morales se trata, la identifica un sentido resarcitorio de significado especial que, para decirlo con palabras de un renombrado expositor (K. Larenz. Derecho de Obligaciones, Tomo II, pág. 69), consiste en "... proporcionar al perjudicado o lesionado una satisfacción por la aflicción y la ofensa que se le causó, que le otorgue no ciertamente una indemnización propiamente dicha o un equivalente mensurable por la pérdida de su tranquilidad y placer de vivir, pero sí una cierta compensación por la ofensa sufrida y por la injusticia contra él personalmente cometida ...", concepto este que muestra cómo, a diferencia de la que por definición debe cumplir en la indemnización de perjuicios patrimoniales, la función que el dinero desempeña en el ámbito inherente a la reparación de aquella clase de agravios no es la de rigurosa equivalencia con vista en una determinada situación anterior que es preciso restablecer al estado que tendría de no haber acaecido el hecho que obliga a indemnizar, sino de razonable compensación para quien injustamente ha sido lesionado en sus intereses no patrimoniales."

Respecto al mismo punto, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que:

*"...el perjuicio moral este refiere al dolor hace parte de la esfera íntima o fuero psicológico del sujeto damnificado, toda vez que, sólo quien padece el dolor interior conoce la intensidad de su sufrimiento, por lo **que éste no puede ser comunicado** en su verdadera dimensión a nadie más. De ahí que el perjuicio moral no es susceptible de demostración a través de pruebas científicas, técnicas o directas, porque su esencia originaria y puramente espiritual impide su constatación mediante el saber instrumental.*

⁷ Sentencia 3382 de noviembre 25 de 1992

Por cuanto el dolor experimentado y los afectos perdidos son irremplazables y no tienen precio que permita su resarcimiento, queda al prudente criterio del juez dar, al menos, una medida de compensación o satisfacción, normalmente estimable en dinero, de acuerdo con criterios de razonabilidad jurídica y de conformidad con las circunstancias reales en que tuvo lugar el resultado lamentable que dio origen al sufrimiento.⁸

En consecuencia, la compensación solicitada por concepto de daño moral no solo se ajusta a la realidad de los hechos, sino que responde a un criterio de justicia para quienes han sido directamente afectados por el siniestro. Además, el Juez cuenta con discrecionalidad judicial para valorar la magnitud del daño y establecer una reparación adecuada, dentro de los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

4. La denominada **EXCEPCIÓN GENÉRICA**.

Frente a esta excepción, solicito a la Señora Juez la desestime, por cuanto la misma carece de fundamento fáctico y normativo, ya que hace referencia a una situación hipotética, no establece argumento alguno que permita inferir que existe alguna causal que impida el normal desarrollo del proceso o que afecte el derecho de defensa de la demandante, por lo que admitirla equivaldría a vulnerar los derechos de la actora por aceptar excepciones sobre las cuales no tuvo la oportunidad de pronunciarse.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos solicito a la Señora Juez declarar **NO** prosperas las excepciones propuestas por la doctora Luisa Fernanda Velásquez Ángel, apoderada de Ricardo Segura Albino, por cuanto las mismas no se ajustan a derecho, se basan en apreciaciones subjetivas que terminan en conclusiones hipotéticas, como consecuencia de ello reconozca de manera favorable todas las pretensiones del libelo demandatorio.

V. PRUEBAS

1. DOCUMENTALES.

- 1.1. Versión escrita y firmada por el demandante, en la que relata los hechos del accidente de tránsito, las lesiones sufridas y los perjuicios padecidos.
- 1.2. Historia clínica actualizada, del tratamiento médico adelantado por mi representado en Viva 1A IPS.
- 1.3. Fotografías de los daños sufridos por la motocicleta al momento del accidente.
- 1.4. Video del momento exacto en el que ocurre el accidente de tránsito.

2. REITERACIÓN DE LAS PRUEBAS.

De manera comedida solicito al Juzgado se sirva decretar todas y cada una de las pruebas solicitadas en el libelo genitor, como las pedidas al descorrer las excepciones propuestas por los otros demandados.

3. COADYUVO.

Manifiesto al Despacho que coadyuvo todas y cada una de las pruebas solicitadas por la doctora Luisa Fernanda Velásquez Ángel, apoderada de Ricardo Segura Albino.

4. DECLARACIÓN DE PARTE

⁸ Corte Suprema de justicia Sala de Casación Civil SC13925-2016

De manera respetuosa solicito al Despacho que, en audiencia pública que tendrá lugar en la fecha y hora que su Señoría señale, rinda declaración de parte de Oscar Fernando Cuellar Pinzón

En estos términos descorro las excepciones propuestas por este demandado. De manera respetuosa y comedida solicito a Su Señoría se sirva negar la prosperidad de cualquiera de las excepciones propuestas, y en su lugar acoger todas las pretensiones de la demanda.

De la Señora Juez.



VÍCTOR MAURICIO CAVIEDES CORTÉS

C. C. 19.492.106 de Bogotá

T. P. 167.242 del C.S de la Judicatura

e-mail: victor.caviedes@prevencionesjuridicas.com

proyectó DSAM.